



SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL

Medellín, treinta y uno (31) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Demandante: PATRICIA ELENA GAVIRIA
Demandados: INVERSIONES QUINTA RUEDA LTDA; SEMBRÍO S.A.S.;
COLPENSIONES; IVÁN RODRÍGUEZ JARAMILLO; y LUÍS
ALFONSO RODRÍGUEZ JARAMILLO
Radicado: 05001 31 05 006 2019 00266 01
Decisión: A-085

DECISIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA

En la fecha indicada, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, integrada por los Magistrados JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ quien obra en éste acto en calidad de ponente, FRANCISCO ARANGO TORRES y JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ, procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte demandante contra el auto proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín el 28 de abril de 2022 mediante el cual negó la medida cautelar consistente en la inscripción de la demanda sobre bienes inmuebles de uno de los demandados.

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, la presente decisión se profiere mediante auto escrito, aprobado previamente por los integrantes de la Sala.

A N T E C E D E N T E S :

En el proceso de la referencia, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín, mediante auto del 28 de abril de 2022, decidió negar la

medida cautelar solicitada por la apoderada de la parte actora, consistente en la inscripción de la demanda sobre un bien inmueble de uno de los demandados, al considerar, i) que se trata de una solicitud ajena al trámite ordinario laboral y en estos casos no es dable acudir a normas del Código General del Proceso y ii) de los hechos y de la justificación de la medida cautelar, no se colige la necesidad de decretarla en los términos del artículo 85A del Código Procesal Laboral y de la Seguridad Social, puesto que no hay prueba de actos observados por el Sr. LUÍS ALFONSO RODRÍGUEZ JARAMILLO, tendientes a insolventarse.

Inconforme con tal decisión, la apoderada judicial de la parte demandante interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, insistiendo en la posibilidad de decretar la medida cautelar solicitada según las normas del Código General del Proceso y sentencias de la Corte Constitucional como la C-192 de 2021. Señala que el demandado ha estado realizando actos tendientes a insolventarse y a la fecha solamente cuenta con un garaje ubicado en el barrio El Poblado de la Ciudad de Medellín, ya que los demás como una oficina en ese mismo sector fue vendida con posterioridad a la solicitud de la medida. Agrega que de manera subsidiaria puede ordenarse la caución establecida en el artículo 37A de la Ley 712 de 2001 para garantizar las resultas del proceso, la cual puede oscilar según su prudente juicio entre el 30% y el 50% del valor de las pretensiones.

Mediante auto del 18 de julio de 2022, el Juzgado decidió no reponer la decisión y concedió el recurso de apelación que había sido interpuesto de forma subsidiaria.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN:

En el término del traslado para alegar concedido a las partes, no se recibió pronunciamiento alguno.

CONSIDERACIONES:

El actual estado de cosas en materia de medidas cautelares, permite la aplicación al proceso laboral del artículo 590 del Código General del Proceso, particularmente en su numeral 1º, literal c. Por eso yerra el juez de primer grado al cerrar las puertas a esta posibilidad, desconociendo que la Corte Constitucional emitió la sentencia C-043 del 25 de febrero de 2021 a través de la cual resolvió: **“PRIMERO. Declarar *EXEQUIBLE* de forma condicionada el artículo 37A de la Ley 712 de 2001, por el cargo de igualdad analizado, en el entendido que en la jurisdicción ordinaria laboral pueden invocarse las medidas cautelares innominadas previstas en el literal “c”, numeral 1, del artículo 590 del Código General del Proceso.”**

Ahora bien, tampoco es dable como lo pretende el demandante, aplicar en su integridad el artículo 590 del C.G.P al procedimiento laboral, pues en esa misma sentencia de constitucionalidad la Corte definió el punto con claridad, cuando advirtió lo siguiente:

“En efecto, la medida cautelar innominada consagrada en el literal “c”, numeral 1º, del artículo 590 del CGP, es una prerrogativa procesal que por su lenguaje no explícito puede ser aplicada ante cualquier tipo de pretensión en un proceso declarativo, dado que no condiciona su procedencia a una situación concreta definida por el legislador. Es a través de este tipo de medidas que el juez laboral puede, con fundamento en los principios de razonabilidad y proporcionalidad, determinar si procede su adopción de acuerdo con el tipo de pretensión que se persiga. A través de ellas el juez podrá adoptar la medida que “encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión”.

Por el contrario, las demás medidas previstas en el art. 590 del CGP responden a solicitudes específicas del proceso civil. Si se admitieran en el proceso laboral todas las medidas cautelares de la referida norma procesal general, implicaría que en él pudiera solicitarse la inscripción de la demanda o el embargo y secuestro de un bien, pasando por alto que el legislador

habilitó estas medidas para casos particulares en lo civil, esto es, cuando se persigue el reconocimiento del derecho de dominio o el pago de una indemnización de perjuicios por responsabilidad contractual o extracontractual.”

De tal manera que, según se entiende de la apelación, el examen de la situación queda reducido a la aplicación o no al caso, de una medida cautelar innominada, o incluso, de la caución del artículo 85 A del CPTSS, frente a las cuales estima la Sala que no están dadas las condiciones para ser ordenadas por las siguientes razones:

En el primer evento, porque aun cuando al juez se le dotó de un margen más amplio en el momento de decretar una medida cautelar innominada, y no solo limitada a las medidas que contemplaba el anterior Código de Procedimiento Civil, esto es, i) la inscripción de la demanda para los bienes sujetos a registro, ii) el secuestro de bienes o iii) el embargo¹, tal facultad tampoco puede ser arbitraria, pues obliga al juez, según las exigencias del propio art. 590 del C.G.P., a analizar aspectos tales como i) la razonabilidad de la medida, ii) la legitimación o el interés para actuar de las partes, iii) la existencia de una amenaza o vulneración del derecho, iv) la apariencia de buen derecho, entendida como las razones que le permiten al juez apreciar que quien demanda puede ser efectivamente el titular del derecho y v) la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida.

En la sentencia ya citada – C-043 de 2021 – al respecto señaló la Corte que,

*“Dicho literal establece, principalmente, que se puede aplicar cualquier otra medida que el juez encuentre razonable para la protección del derecho objeto de litigio, impedir su infracción o evitar las consecuencias derivadas de la misma, prevenir daños, hacer cesar los que se hubieren causado o asegurar la efectividad de la pretensión. Para decretar la medida cautelar el juez apreciará, entre otras situaciones, la legitimación o interés para actuar de las partes **y la existencia de la amenaza o la vulneración del derecho.**”* (Destaca esta Sala)

¹ Artículo 690 del anterior C.P.C.

En este orden, la parte actora soporta la presente petición, básicamente en que el accionado ha estado realizando acciones tendientes a sustraerse del cumplimiento de las decisiones judiciales que lleguen a adoptarse. Para la Sala, las afirmaciones de la demandante o su apoderado al respecto no constituyen una prueba aceptable sobre la necesidad de la medida, ni tampoco de la existencia de una amenaza o vulneración del derecho, por lo cual bien puede inferirse que no es el momento de decretar las medidas deprecadas.

El hecho de que se aporten unas fotografías donde aparecen unos avisos de venta de una propiedad, no significan de ninguna manera que el demandado esté realizando actuaciones tendientes a insolventarse, más aún cuando no existe una identificación plena y total claridad acerca de que ese inmueble sea de propiedad del señor RODRÍGUEZ JARAMILLO.

De otro, lado, finalmente, en cuanto a la aplicación del artículo 85 A del CPTSS, reservado, este si, al campo laboral, se tiene que la disposición referida prescribe como presupuestos para la procedencia de la medida, los siguientes: *i)* que se adopte a solicitud de parte, lo que se traduce en que el juez no puede iniciarla de oficio; *ii)* en la solicitud, que se entiende hecha bajo la gravedad del juramento, se deben indicar los motivos y los hechos en que se funda; *iii)* que se refiera a la ejecución de actos efectuados por el demandado tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, según lo considere el juez, o cuando éste estime que aquel se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, y *iv)* que la medida se sustente en las pruebas aportadas acerca de la situación alegada, presentadas en la audiencia especial que cite el juez.

Frente a lo anterior, reitera la Sala que no fueron aportadas pruebas dentro de la solicitud, a través de las cuales se demuestren los actos que alega la parte accionante como tendientes a insolvencia por parte del demandado, presupuesto indispensable para la procedencia de la medida.

Lo anterior sin perjuicio de que la parte actora pueda en cualquier momento del proceso ordinario, solicitar en forma regular la aplicación de las medidas cautelares que estime pertinentes, a fin de que sean tramitadas y decididas de conformidad con los lineamientos antes expuestos y cuando se tenga prueba idónea acerca de la situación alegada.

En consecuencia y sin más elucubraciones, el auto de primera instancia que por apelación se revisa será confirmado, y se dispondrá la devolución del expediente para los fines consecuentes.

Costas en esta instancia en contra de la parte vencida en el recurso, cuyas agencias en derecho se fijan en la suma de \$100.000. Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Primera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E:

CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Medellín el 28 de abril de 2022.

Costas en esta instancia como se dijo en la parte motiva.

Se notifica lo resuelto por ESTADOS y se ordena devolver el expediente al Juzgado de origen.

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
Nº 057 del 10 de abril de 2023

Consultable aquí:
<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/147>

Firmado Por:

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: 503ebe63f5355fc45f3b7585a99cf7c435672c03507902561d43d2418e5d301c
Documento generado en 31/03/2023 03:12:43 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>